



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00520-000

PROCESO: EJECUTIVO

EJECUTANTE: GILMA PEDRAZA DE GARCÍA

EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP

ORDINARIO: 1100133335026-2013-00592-00

La parte ejecutante, a través de apoderado judicial, ha solicitado a este juzgado, que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, con el fin de obtener la devolución de los descuentos a ella realizados por aportes no efectuados a pensión por la suma total de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.871.080,56) m/cte**, suma que resulta de la diferencia entre el valor real a descontar por concepto de aportes no efectuados y el valor erróneamente descontado por la entidad ejecutada, ordenado en el numeral octavo de la resolución No. RDP 17711 del 27 de abril de 2017.

De la misma manera, solicita el pago de intereses moratorios liquidados a la tasa más alta establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, causados desde el 24 de enero de 2017, fecha de ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago de la obligación, por la suma aproximada de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$896.286,32)**.

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto.

Para el efecto se analizará lo siguiente:

A. PRETENSIONES

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

*“1. El pago a mi mandante por concepto de la devolución de los descuentos a ella realizados por aportes no efectuado a pensión, el cual estimo en la suma de **tres millones ochocientos setenta y un mil ochenta pesos (\$3.871.080,56)** suma que resulta de la diferencia entre el valor real a descontar por concepto de aportes no efectuados y el valor erróneamente descontado por la U.G.P.P. (sic) en el artículo Octavo de la Resolución RDP No. 017711 del 27 de abril de 2017.*

*2. El pago de los intereses moratorios liquidados a la tasa más alta establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, causados desde el día **24 DE ENERO (sic) DE 2017**, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago de la obligación, por la suma aproximada de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$896.286.32)** de conformidad con la siguiente liquidación” (Ver tabla visible a folios 3 a 6 del plenario)*

3. El pago de la indexación o actualización monetaria, que deberán ser liquidadas como lo dispone el citado fallo y hasta cuando se haga efectivo el pago total de la condena.

4. Por las costas del proceso ejecutivo que ahora nos ocupa para los efectos pertinente.”

B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Destaca el abogado de la parte actora, que la sentencia proferida por este Estrado Judicial quedó ejecutoriada el **23 de enero de 2017**, y la cual ha sido incumplida por la entidad demandada, en razón a que la entidad ejecutada realizó el descuento de las mesadas atrasadas de manera errónea, pues tuvo en cuenta todo el tiempo laborado por la ejecutante, cuando el fallo de primera instancia no realizó pronunciamiento alguno respecto de los descuentos que se debían realizar por aportes no efectuados a pensión.

Manifiesta, que el mentado fallo fue objeto de apelación, y en tal sentido, mediante sentencia de data 7 de diciembre de 2016, confirmó el fallo emitido por este Despacho Judicial.

Señala, que la Unidad de Gestión Pensional reconoció en favor del ejecutante la suma de \$33.254.142,52. Sin embargo, la entidad ejecutada al momento de realizar los descuentos correspondientes a los aportes no efectuados para pensión, estableció en el artículo octavo de la Resolución RDP 017711 del 27 de abril de 2017, descontar de las mesadas pensionales a las que tiene derecho la señora GILMA PEDRAZA la suma de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS**, por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.

Arguye el Profesional del Derecho, que la entidad ejecutada al realizar dicho descuento, lo hizo de manera errada, ya que se tuvo en cuenta todo el tiempo laborado, **cuando en el fallo de primera instancia no se realizó pronunciamiento alguno respecto de los descuentos que se debían realizar por aportes no efectuados a pensión.**

Por lo anterior, existe una descompensación entre el valor descontado por concepto de aportes no efectuados para pensión y el valor real de dicho descuento, el cual equivale a la suma de \$4.797.082,44, por concepto de descuentos que se debían realizar por los aportes dejados de efectuar en el último año de servicios.

C. CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibidem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”*

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GILBOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

*consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las **que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial**, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”*

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros para tener en cuenta en casos como el presente:

1. Solicitud: A través de memorial radicado el abogado de la señora Filma Pedraza de García, solicitó al juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el fin de obtener la devolución de los descuentos realizados sobre los aportes no efectuados para pensión.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

*k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, **de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia** y de laudos arbitrales contractuales estatales, **el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.** (...)*

Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez, el artículo 192 del mismo ordenamiento, dispuso en su inciso segundo:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas, en principio el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva, es decir dicho término inicia luego de vencidos los 10 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP**.

En este sentido, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 21 de noviembre de 2018 (fl.1º), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del 23 de enero de 2017.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado, se encuentra la sentencia proferida por este Juzgado el 28 de marzo de 2016, que en lo que respecta a la ejecución pretendida, ordenó lo siguiente (fls. 231-240 cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho):

“Primero.- DECLARAR la nulidad de las resoluciones No.RDP 40813 de 3 de septiembre de 2013 y RDP 45785 de 2 de octubre de 2013, por medio de los cuales se negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante.

Segundo.- DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias de las mesadas no percibidas anteriores al 5 de agosto de 2010.

Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, **CONDENAR** a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a que reliquide la pensión de jubilación de la

señora Gilma Pedraza de García identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.142.135, en cuantía equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio mensual del ultimo año de servicios, esto es, del 1° de enero al 31 de diciembre de 1990, incluyendo como factores salariales la asignación básica, incremento de antigüedad, prima de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación y prima de servicios, en los valores devengados para dicha anualidad. Lo anterior en el entendido, que aquellos factores que se causen anualmente deberán liquidarse con el 75% de sus doceavas partes.

Cuarto.- *La reliquidación de la pensión de la demandante aquí ordenada, se deberá realizar a partir del 1° de enero de 1991, pero con efectos fiscales **a partir del 5 de agosto de 2010**, por haberse operado la prescripción de las mesadas anteriores a dicha fecha.*

Quinto.- **CONDENAR** a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a pagar las diferencias que resulten de la reliquidación de la pensión establecida en esta providencia, acorde a lo expresado en la parte considerativa.

Para tal efecto, las sumas correspondientes deberán ser reajustadas y actualizadas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la formula señalada.

(...)

Así mismo, la sentencia emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 7 de diciembre de 2016², **confirmó en su integridad** la sentencia proferida por este Despacho Judicial.

Seguidamente, debe tenerse como tal, la Resolución RDP 017711 del 27 de abril de 2017, emanada de la UGPP, en virtud de la cual se da cumplimiento al fallo antes aludido, disponiendo la reliquidación de la pensión de jubilación. (fls. 9-12).

Finalmente, es necesario acudir también a la liquidación que realizó la UGPP para cancelar las sumas ordenadas en la Resolución anterior, en tanto la misma explica la manera detallada en que se pagó de la prestación (fls. 13-15).

Conforme a lo anterior, para el Despacho se torna indispensable estudiar las sentencias proferidas, juntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó la UGPP, para determinar si se configura o no un título ejecutivo, y si se cumplen o no los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso.

² Folios 279- 284 cuaderno de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

En este sentido, se reitera que lo pretendido por la parte actora, es la “suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$4.767.366M/cte)**, suma que resulta de la diferencia entre el valor real a descontar por concepto de aportes no efectuados y el valor erróneamente descontado por la entidad ejecutada, ordenado en el numeral octavo de la resolución No. RDP 17711 del 27 de abril de 2017, junto con los intereses moratorios generados.

Ahora bien, analizado el expediente ejecutivo junto con el ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en su totalidad, se observa que la sentencia de primera como de segunda instancia, guardaron silencio respecto de los descuentos a realizar sobre las mesadas pensionales por concepto de aportes pensionales de factores de salario no efectuados.

También se advierte, que el profesional del derecho acusa de irregular las deducciones por concepto de aportes a pensión efectuadas por la UGPP, sobre los dineros objeto del pago de la sentencia y pretende mediante la acción ejecutiva, reclamar la suma objeto de deducción, considerando que dicho descuento fue realizado sin acatar las órdenes proferidas en sede judicial.

Al respecto, se debe decir que la orden emitida por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue confirmar en su integridad, la sentencia proferida por éste Despacho Judicial, es decir, no modificó ni revocó ninguna orden, por lo que, la providencia que constituye el título ejecutivo dispuso que: (...) *“Siendo así las cosas, hay lugar a confirmar la sentencia proferida en primera instancia, ya que la pensión de la demandante debe reliquidarse en la forma antes descrita no solo en acatamiento de las normas referidas, sino en observancia del concepto de salario entendido este como todo aquello que recibe el trabajador en dinero o especie como contraprestación directa del servicio.”*

Conforme a lo anterior, se debe reiterar que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó que ***“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial (...)”***

Es decir, si la obligación no se encuentra consignada, en este caso en la sentencia, no es posible para el juzgador del proceso Ejecutivo, darle un alcance que no corresponde o que excede a lo dispuesto en el título, pues se basaría en una obligación que no es expresa.

Por lo anterior, el Despacho considera que en el presente asunto, aun cuando existe un título ejecutivo, el mismo no contiene una obligación clara,

expresa y exigible por la que se pueda ejecutar a la UGPP, en tanto que, lo pretendido dentro del presente asunto, no fue ordenado por el Juzgado en primera instancia, así como tampoco por el Tribunal al desatar la alzada, no siendo dable para esta agencia judicial darle una interpretación al título que no tiene, u omitir las órdenes dadas en el mismo.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en proveído adiado 15 de abril de 2016, M.P. GERMÁN RODOLFO ACEVEDO RAMÍREZ, señaló: *“Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que el a quo incurrió en un error al declarar probada parcialmente la excepción de pago y continuar adelante la ejecución, como es, realizar la actualización de la primera mesada pensional que había sido ordenada pagar al demandante para el año 1997, **extralimitándose de esta manera en lo que se había ordenado en la sentencia que presta mérito ejecutivo**, en la que ya se reliquidó la pensión y se ordenó efectuar el pago de un monto pensional, **suma que no debe ser sujeto de actualización, pues estamos ante un proceso ejecutivo en el cual se debe estar a lo ordenado en el título, sin que haya lugar a interpretaciones y mucho menos como en el sub lite, a ordenar pagos que no han sido determinados en el mismo**. Esto por cuanto, conforme lo ordenó el título sólo hay lugar a ordenar la indexación de las diferencias resultantes entre el valor cancelado y el valor que resultó pagar, junto con el pago de los respectivos reajustes anuales.”* (Negrita del Despacho)

Corolario de lo anterior, el Despacho **NEGARÁ EL MANDAMIENTO EJECUTIVO** conforme lo pretendido por la demandante, toda vez que, la parte ejecutante no puede pretender que, por el hecho que la UGPP, haya realizado descuentos de dinero por concepto de aportes para pensión sobre los factores de salario tenidos en cuenta para reliquidar la pensión de jubilación de la señora Pedraza de García, se pueda, a través de la acción ejecutiva, solicitar la devolución de dichos dineros, pues en primer lugar, y como se dijo en líneas anteriores, dicha orden no se encuentra expresa en las sentencias que conforman el título ejecutivo, y en segundo lugar, y no menos importante, que dicha decisión fue proferida a través de acto administrativo, por lo que, aparentemente goza de legalidad, y por consiguiente, no es plausible para el despacho, que la parte ejecutante afirme que la entidad realizó un pago parcial y/o incompleto.

A manera de conclusión, se advierte de los hechos y pruebas allegadas con el escrito de la demanda, que no existe título ejecutivo donde conste que la Unidad de Gestión Pensional- UGPP, está obligada a devolver o cancelar en favor de la señora Gilma Pedraza de García, las sumas deducidas y retenidas por concepto de aportes en pensión al momento de la reliquidación y pago de la misma, lo que confirma aún más, que no se logró demostrar que las pretensiones señaladas en la demanda vinieran del título ejecutivo.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. - NEGAR EL MANDAMIENTO EJECUTIVO, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO. - Se reconoce personería jurídica al abogado **CONRADO ARNULFO LIZARAZO PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.776.323 de Tunja y portador de la tarjeta profesional 79.859 del C. S. de la J., como apoderado principal de la demandante, en los términos y para los fines del poder visible a folio 8 del expediente.


TERCERO Por secretaría, devuélvanse los anexos de la demanda sin necesidad de desglose.

CUARTO. - Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

IV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 8 DE JULIO DE 2020 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

021e9e13e13df7e148c0eeadab05c0e20b445250282e1bbaea00878ef7
77f7fa

Documento generado en 04/07/2020 06:27:10 AM